

La epopeya realizada por España con el descubrimiento y colonización de América, (más con ésta que con aquélla), no ha tenido igual en la historia del mundo y no podrá repetirse en tanto no se descubra un nuevo planeta. Como su obra está escrita con caracteres indelebiles, como ha sido creación, los que pretenden suprimirla o empujarla, se condenarán a sufrir los tormentos mitológicos de Sísifo o las Danaides.

MADRID Benito MENACHO.

"ESPAÑA CON HONRA"

VALE 10 cs.

SEMENARIO HISPANO-MEXICANO

VALE 10 cs.

DIRECTOR: BENITO MENACHO ULIBARRI.

ASPIRACION

Todo ciudadano hispanoamericano que fije su residencia en España previa identificación del consulado respectivo, adquirirá, ipso-facto, todos los derechos y deberes señalados por la Constitución de España a los nacionales. En reciprocidad, todos los españoles que lleguen a las Repúblicas Hispanoamericanas, para residir en ellas, previa la identificación antes señalada, adquirirán, ipso-facto, los derechos y deberes que las distintas Constituciones concedan y señalen a sus nacionales. Quedan exceptuados los reos de delitos comunes sujetos a lo prescrito en los tratados de extradición.

Benito MENACHO.

AÑO I

Registrado como artículo de 2a. clase,
2o. grupo, el día de de 1936.

MEXICO, 23 ENERO DE 1936

OFICINAS PROVISIONALES:
M. R. del Toro de Lázaro No. 7.
MEXICO, D. F.

No. 2

Deberes de los Españoles Residentes en México hacia la Sociedad Mexicana

Cuando un huésped llega a la residencia de cualquier familia que le ha honrado ofreciéndole un hogar por algún tiempo, el recién llegado tiene, a más de cumplir con todas las exigencias sociales trazadas de modo general en los códigos de educación por él practicadas y vistas practicar, el deber ineludible de estudiar las modalidades que dichas exigencias han tomado en el seno de la familia que bondadosamente lo recibe y que sin afectarles en el fondo exigen pequeños cambios en la forma. El emigrante es un hombre que llega a una sociedad distinta de aquella en que nació y vivió hasta el momento del tránsito, distinta en la forma, equivalente en el fondo, pues todas las sociedades humanas son reflejo unas de otras y la diversidad resulta tan sólo de la calidad y forma del espejo en que la reflexión se efectúa. Las exigencias sociales son en este caso el conocimiento y cumplimiento de las leyes y la modalidad de la diversidad del concepto punible y la magnitud de la sanción. El emigrante para vivir apreciado y respetado en la nueva sociedad de que va a formar parte integrante, tiene el deber de cumplir sus leyes cualquiera que sean sus modalidades, pues de lo contrario, así como el huésped es despedido de la casa cuando una incorrección comete, el emigrante será expulsado si de las leyes y de las modalidades vigentes pretende burlarse.

El señor Iglesias llegó a México y encontró planteado y resuelto un litigio obrero-patronal entre el señor Menacho y la Junta Directiva de la Cámara Española de Comercio, en el que los Tribunales mexicanos habían dado la razón al primero y confirmado sus fallos cuando la Junta había alegado que sus bienes pertenecían al Gobierno español, pretensión denegada por los Tribunales mexicanos, fundándose en las reglas formuladas por el mismo Gobierno español para la formación y vida de las Cámaras de Comercio de Ultramar. El deber ineludible del señor Iglesias era aca-

tar lo sentenciado, no promover nuevos incidentes, recordar a los componentes de esa Junta Directiva la obligación precisa e ineludible de no adoptar actitudes de rebeldía, más aun de contumacia, en contra de las sentencias pronunciadas, pues sólo así cumpliría con la misión esencial confiada por su Gobierno de mantener buenas relaciones con el de México, de cuyo cumplimiento se separaba protegiendo las rebeldías señaladas, fomentándolas y exacerbándolas. Pero la conducta del señor Iglesias se examinará más despacio, cuando tengamos la autorización necesaria para exhibir sus manejos y ahora nos limitaremos a lo que el título del artículo señala.

Si en vez de un huésped, la invitada es una familia, y uno de sus componentes comete una incorrección, el resto de la familia está obligada, so pena de ser incluida en el mismo concepto despectivo merecido por el incorrección, a protestar contra éste, a censurarlo, a impedir que se torne en colectiva la falta individual, a

(Pasa a la 3a. pág.)

MUSSOLINI Y EL DERECHO

Sean las que fueren las opiniones políticas que se profesen, hay que reconocer los grandes servicios prestados a Italia por su Dictador, y una comparación imparcialmente hecha entre el estado de aquella Nación en 1923 y el actual, basta para emitir juicio favorable sobre la actuación fascista prescindiendo, naturalmente, del sacrificio de ciertos derechos exigidos por la naturaleza del régimen. Mas, en el momento actual, decisivo para sistemas e ideas, decisivo para la renovación de las guerras que se había tratado de eliminar por lo menos temporalmente del tablero político, decisivo para la fraternidad entre los hombres y decisivo para mantener o aniquilar las esperanzas de renovación de las relaciones internacionales encaminándolas hacia lo justo, toda conciencia honrada debe protestar en voz alta y clara contra el atropello de un pueblo hasta hoy independiente, y que, si se dejase consumir quedaría como la desaparición de Polonia en el siglo XVIII, cual monumento de la perfidia original de los hombres, no vencida en los miles de años en que trataron de civilizarse.

(Pasa a la 3a. pág.)

El Caso Iglesias ante el Elemento Obrero Mexicano

Los obreros mexicanos han conseguido en los últimos años lo que otros llaman ventajas y yo considero reconocimiento de derechos, consignados en la Ley Federal del Trabajo, ley favorable a los patrones, lo que se demostraría con sólo echar una ojeada al número de litigios ganados por los patrones comparativamente al de los perdidos. Mas, perfecta o no esa Ley, garantiza el cumplimiento de todos los contratos de trabajo vigentes en la República y a él están obligados todos los patrones y trabajadores residentes en territorio mexicano, sin distinción de nacionalidades. Todo el que trabaja en México, cualquiera que sea la actividad a que se dedique, el país de donde proceda, la nacionalidad que conserve, está obligado al cumplimiento de las disposiciones contenidas en esa ley, a respetar fallos y a cumplir sanciones. Y al mismo tiempo todos los sindicatos obreros, las federaciones, los obreros aislados, tienen el deber, entiéndase bien, el deber, de exigir que esa ley sea

cumplida en todos los casos, porque la primera condición de una ley perfecta es que sea general y porque cualquier precedente que se dejara establecer, falseando alguna de sus disposiciones, podría ser el portillo por donde desapareciera velozmente una gran parte de los derechos en aquélla consignados. Así, el caso que voy a exponer.

El señor Menacho entabla un litigio obrero-patronal con la Junta Directiva de la Cámara Oficial Española de Comercio en los Estados Unidos Mexicanos, pidiendo reposición y sueldos caídos, lo gana ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana y como la demandada alega no tener dinero, se ve precisado a nombrar Interventor con cargo a la Caja. La demandada, institución de derecho privado que en tal concepto ha pleiteado dos años y perdido, consigue, ignoramos por qué medio que la Secretaría de Relaciones Exteriores, interponiéndose ante un fallo de la Suprema Cor-

(Pasa a la 3a. pág.)

EMILIANO IGLESIAS NO VOLVERA A MEXICO

Parajustificar nuestro aserto no nos apoyaremos en consideraciones políticas, pues sólo ejercemos de profetas cuando consideraciones exactas y condiciones precisas hacen pensar lógicamente en la realización de un hecho y actualmente en España, merced a la conducta sinuosa y artera del cínico Alcalá Zaomra, uno de los protectores de Emiliano, el horizonte está completamente ennegrecido y lo mismo puede aparecer al descenderse la nubosa cortina, una República conservadora o radical que la Dictadura, la Restauración o el Estado Soviético, que a tan triste condición nos han ido reduciendo el pseudo maquiavelismo presidencial, las coaliciones absurdas de partidos desprovistos de procedimientos honrados, buscadores del poder sea como fuere, y las deficiencias morales de los hombres nuevos, unidas a las viciadas costumbres políticas de los antiguos.

Nosotros cimentaremos nuestra opinión en consideraciones éticas. Y no se rían los que recuerden que el señor Iglesias durante toda su vida pública no se ha enterado de que existan esa clase de consideraciones y le crean imposibilitado de reaccionar ante la exposición de ellas. Nosotros concedemos que eso ha sido cierto hasta ahora y que habría razones suficientes para temer que el hombre que después de la semana trágica de Barcelona apareció entre dos colchones en una casa de mal vivir, que no procesó a los redactores del "Be negro" de la misma ciudad, ni a los autores de "El último pirata del Mediterráneo" y que aguantó durante dos años con estoicismo (eufemismo forzado) que toda la Asamblea Constituyente le expulsara de su seno por considerar que honradamente no podía convivir con él; para temer, repito, que lo aquí dicho resbale sobre su coriacea envoltura. Pero lo intentaremos.

La primera incorrección cometida por el señor Iglesias hacia este país fué la inusitada dilación en tomar posesión de su cargo, dilación inexplicable aun tomando en cuenta el tiempo necesario para adquirir buenas maneras y la técnica del oficio que aun siendo pobre necesita ser estudiada. La mayor prueba de consideraciones que puede dar un diplomático al país donde va a desempeñar una misión es apresurar su llegada al mismo. ¿Qué diría una familia si después de haberle sido anunciada una visita, el visitante la demorara meses tras meses? Y en el caso de un diplomático la demora es peor todavía, pues indica que no hay nada importante que tratar entre ambos países.

La segunda incorrección, por ser de carácter personal es más grave. Establecido un protocolo por la cancillería mexicana, el señor Iglesias se metió el cuadernito en el bolsillo y en su soberbia de improvisado recordó lo de "si no quieres caldo, tres tazas" y efectuó su presentación deslumbrante de dorados bordados, pues para eso se había hecho el gasto y enviado retratos a todos los diarios madrileños con expresión de costo del atuendo.

La tercera incorrección consistió

en cerrar la Cámara de Comercio antes de estar funcionando oficialmente como Embajador. Desde el punto de vista de los socios de la misma que toleraron la bofetada nada tengo que decir aquí. Desde el punto de vista de la sociedad mexicana, de la Nación mexicana representada en sus tribunales de justicia, el ademán violento, el gesto despectivo, la actitud virreinal, causaron el efecto necesario e imprescindible; la voluntad de no dejar impune la incorrección. Por el hecho quedaron heridos con sangrienta y visible herida la independencia nacional inseparable de la de sus tribunales, el respeto obligado de todo extranjero a las leyes del país donde reside, más obligado aun para los representantes de Estados extranjeros, pues la convivencia entre los diversos pueblos tiene por base insustituible el respeto mutuo de sus leyes.

La cuarta incorrección, no menos grave, fué que después de haber agotado todos los recursos imaginables y empleado toda clase de procedimientos, incluso la bajeza para conseguir que las autoridades competentes mexicanas compartieran su criterio respecto a la nacionalidad de los bienes de la Cámara Española de Comercio, la disolvió arbitrariamente, lo que, sea cualquiera el punto de vista en que el observador se coloque, sólo puede interpretarse como una actitud violenta de reto a las sentencias firmes de esos Tribunales mexicanos y despectiva para el cumplimiento de ellas. Y cabría añadir en el capítulo de las bajezas, visitas interesadas y banquetes preparados con fines incalificables, con lo que se repetía la ofensa para las autoridades judiciales mexicanas a las que se suponía susceptibles de variar sus fallos mediante esa clase de procedimientos. Y en ese mismo orden de consideraciones no debemos dejar de lado que trató de emplear el argumento de que la cuestión era entre españoles, con lo que demuestra el desconocimiento de las leyes de la República Mexicana que si exigen deberes a los extranjeros que en ella residen sabe también defender enérgicamente sus derechos.

Y como esto es largo, ponemos aquí coma, aunque con lo ya dicho y uniendo la repercusión de tal conducta en los medios obreros mexicanos, basta y sobra para que el señor Iglesias no vuelva, pues cuando un huésped, después de haber cometido muchas incorrecciones, persiste en seguir cometiéndolas, se le llama al orden de buena o de mala manera, generalmente de mala, porque no se viste nadie de frac y se pone de guantes para decirle cuatro verdades al barrendero insolente.

Lo revolucionario es que un simple particular ponga en duda, niegue y ataque públicamente la autoridad de la cosa juzgada; es que no habiendo encontrado medios legales de obtener lo que quería, los emplee "extra-legales", es que él pretenda salir de la legalidad para volver a entrar en el derecho.

INDICADOR

"ESPAÑA CON HONRA"

Oficinas provisionales:

M. R. DEL TORO DE LAZARIN, 7.
México, D. F.

Director responsable:

Benito Menacho Ulibarri.

Administrador:

SILVESTRE ROSAS

SUSCRIPCIONES:

En México, España, Estados Unidos,
Canadá, Cuba e Hispanoamérica
Tres meses\$ 3.00
Países de la Unión Postal
Tres meses\$ 4.00
Números del día 0.10
Números atrasados, precios convencionales.

Para anuncios y publicidad, dirigirse a la Administración.

De todos los artículos y sueltos publicados sin firma es autor responsable el Director.

CORRESPONDENCIA

Señora de G.—Celebro sinceramente que una señora conceda atención a los asuntos de la Colonia española y más aún, que tenga la bondad de leer lo que escribo. Supongo que es usted española, por el dolorido tono de su queja y la viveza con que trata de rebatir algo de lo expuesto por mí en el primer número de "ESPAÑA CON HONRA", pero aunque sólo fuera por afinidad, siento que usted comparte en algo mis juicios y me creo obligado a tratar de convencerla en el resto. Es cierto como usted afirma con vehemencia que en la tertulia del día 21 algunas personas trataron de razonar combatiendo el acto que se proponía realizar el señor Iglesias; pero (fíjese usted bien), lo hicieron fundándose en la forma arbitraria, sin que ninguna de ellas, transportando la cuestión al terreno de los principios éticos dijera: 1.—Que una asociación compuesta de personas honradas no puede disolverse para evitar pagos a que ha sido condenada por tribunales competentes; 2.—Que esa misma asociación, destinada a mantener el prestigio comercial de sus componentes y a cimentar relaciones comerciales entre España y México, que han de basarse en honradez de procedimientos, no puede aceptar complicidades en quiebras escandalosas; 3.—Que cuando se vive en países extraños las colectividades, por pequeña que fuese su representación, están obligadas al respeto extremado de las leyes y de las costumbres de los países donde reciben hospitalidad. Y si alguien hubiere dicho algo de eso en la mencionada tertulia quizá no habría convencido al señor Iglesias que iba no a discutir, sino a lanzar un úkase al modo virreinal malo; pero hubiera dejado a salvo lo que necesita brillar siempre sin sombras: la moralidad y la dignidad de los que en aquel momento eran considerados como buenos rregos desprovistos de toda ética por el señor Iglesias. Yo me permito creer, distinguida señora, que habré acallado con esta explicación los escrúpulos que le impiden aprobar mi censura colectiva.

Señor D. E. H.—No puedo conformarme con censura tan poco fundada. Si usted leyó el periódico y se fijó en el contenido de mi carta al señor P. G., vería en ella la traducción clara de mi pensamiento. La actitud del señor que usted trata de defender no me causó indignación por haberse colocado en contra mía, pues por lego que sea cualquiera en cuestiones de derecho, desde luego se comprendía que el subterfugio empleado para eludir el cumplimiento de sentencias firmes de autoridades mexicanas, pasadas ya en autoridad de cosa juzgada, no había de ser acogido por la Nación Mexicana, defensora de las sentencias pronunciadas por sus Tribunales. Lo

■ POLITICA ESPAÑOLA ■

La Moralidad de los Gobiernos Republicanos Españoles

Risible parecerá, pasado el primer cuarto del siglo XX, cuando se ha teorizado ya extensamente sobre todas las cuestiones relacionadas con el derecho político, profundizando el estudio de principios, normas y procedimientos, tener que ocuparse de que los gobiernos deben buscar la moralidad de los gobernados y contribuir a que la existente no se falsee, se disminuya o se pierda. Y más risible parecerá que se diga que a medida que un régimen se acerca como más perfecto que los otros competidores, tiene que considerarse más obligado a extremar esa moralidad en todos sus actos. El régimen republicano, expresión inigualable de los poderes públicos originados por la voluntad general, lleva en sí además, ya que se le supone representación fiel de los pueblos regidos, el contenido moral de sus pueblos, o mejor dicho, debe llevarlo.

que me indignó (hay que fijarse bien en la trascendencia del acto), fué que un Representante de España, de la Gran Nación Española, faltara descaradamente a la verdad, mintiendo ante el Representante de la Nación donde ejerce su misión. ¿No siente usted su rostro enrojecido, no le arde a usted la cara sólo de pensar que cualquier día, en cualquier momento, en la calle, en sociedad, a solas o en público, puedan decirle: "el Representante de España miente, es un vulgar embustero"? Y no puedo figurármelo a usted sin las orejas coloreadas al rojo-cereza, el más vivo de los rojos en la tez, si a eso se añade "y se lo han dicho en una sentencia judicial y se lo ha tragado." Yo creo, quiero creer, espero confiadamente que reflexionará de nuevo sobre el asunto, que se convencerá de su importancia desde el punto de visto del prestigio de nuestra representación, unido invariablemente, queramos o no, al de las personas provistas de cargos oficiales, y que me escribirá otra carta más amable. Ojalá que todos los españoles que dudan me sometieran sus dudas.

Señor D. V. S.—Agradezco sinceramente su carta de felicitación y quiero al par que le hago constar tratar de desvanecer sus dudas respecto de que mi asunto pueda interesar a los obreros mexicanos o a los obreros en general. Todos sabemos que hay establecidas en el país numerosas empresas con capital extranjero, muchos talleres dirigidos por extranjeros y que en todos esos lugares, la mano de obra es mexicana, estimándose en centenares de miles los mexicanos que viven de salarios proporcionados por esa clase de empresas. La pretendida disolución de la Cámara Española efectuada en la tertulia del 21 de diciembre fué originada por haberse negado los organismos competentes del gobierno mexicano a admitir la tesis de la representación oficial de España de que los bienes de la Cámara fueran propiedad del gobierno español, fundando su decisión en el Estatuto y Reglamento concedido por el mismo gobierno a la Cámara, es decir, batiendo al enemigo con sus propias armas. De modo que el hecho arbitrario obedeció a la tesis sustentada en un principio y que se procura mantener por la fuerza una vez perdida ante los tribunales competentes. No quedará el hecho impune; pero se trata de que quede y todos los trabajadores mexicanos por solidaridad con los que prestan sus servicios a extranjeros tienen que impedir que tal tesis subsista, aunque sea en estado latente. Si después de fallada una reclamación obrera en favor de los obreros por todos los

Han pasado cuatro años desde el día del milagro, del 14 de abril de 1931 y cabe preguntar si en el terreno de la moralidad los gobernantes republicanos han cumplido los deberes antes señalados y si han representado con su conducta el nivel moral del pueblo español y por dolorosa que sea la confesión, nos vemos obligados a confesar no deficiencias compatibles con la imperfección humana, sino transgresiones imperdonables y condenables. Y conviene designar como mejor ciudadano al que señala lo malo de su patria, sin acrimonia ni rencor, pero lo señala, que al que, creyendo que los males sufridos por los pueblos tienen origen providencial o suponiendo a los individuos impotentes para corregirlos, error indisculpable en una democracia, pues falsea su principio esencial, su única base, imita al avestruz y supone la cuestión resuelta por no ser tratada. Error muy extendido entre españoles, porque casi en todos ellos hay algo de dominante y de tiránico, es el de confundir cuando gobiernan, sus personas con la patria y admitir, o fingirlo por lo menos, que los ataques a ellos inferidos sólo pueden hacerse por malos patriotas; y error también y grande el cometido por los españoles que al ver atacado a un funcionario se colocan irrazonadamente de su parte por el solo prestigio de la autoridad que dejó de ser única desde el siglo XVI. Digresión necesaria.

Los gobiernos de la República Española desde su primer día han sido francamente inmorales. El primer gobierno formado por una reunión de hombres cuyos méritos anteriores, negables en algunos, no voy a discutir aquí, fué un gobierno de facto. Su papel estaba trazado. Convocar inmediatamente al pueblo español para que en una Asamblea Constituyente dijera cómo y por quien quería ser gobernado y nada más. Inmoral era legislar sin autorización previa de ese pueblo, porque al hacerlo se detentaba esa misma soberanía que se pretendía restituirle, y sin embargo, se legisló y con pasión sobre lo que hasta ese momento había sido cimiento de la sociedad española. Inmoral era perseguir a los representantes de las ideas contrarias cuando se organizaban para manifestarlas en la Constituyente y no se les permitió intervenir en las elecciones, empleando procedimientos atentatorios a la dignidad humana, y atentatorios al prestigio nacional. Inmoral fué la violación de programas, el poco respeto a las palabras pronunciadas y a

tribunales mexicanos pudiera el dicho caprichoso de un representante extranjero invalidar los fallos, la Ley Federal del Trabajo tendría que llevar un artículo adicional que expresara quedaban excluidos de sus efectos los mexicanos trabajadores con empresas extranjeras. Y si el precedente quedara sentado, todos los obreros serían parias en su patria. Así, estimado amigo, no hay una sola actividad en el campo obrerista que no esté amenazada con el cumplimiento de la tesis formulada por la representación oficial española (cumplimiento aparentemente efectuado ya por la fuerza), y a él tiene que oponerse con todas sus fuerzas. Todo precedente que quede sentado es un paso hacia la jurisprudencia y creada ésta sirve de reguladora esencial del derecho en lo futuro.

No se va a la justicia por la injusticia ni a la verdad por la violencia.

SUELTOS DE REDACCION

Se nos dice que un español gordo, bajo de estatura, con grandes gafas y feo, excesivamente feo, con fealdad despreciable de todo límite, rayana en lo incomprensible, comentando con otros paisanos el primer número de este semanario, respondía a las apreciaciones favorables, diciendo: "Sí, sí; pero los cuartitos están en casa." Ciertamente es que los cuartitos están temporalmente en casa; pero la pequeñez mental del individuo y su carencia de moral, le impiden sin duda comprender que durante el tiempo que continúan los cuartitos en lo que llama casa, por confusión con cueva, se van perdiendo a raudales la honradez colectiva y la respetabilidad ante la sociedad mexicana que contempla con verda-

las promesas hechas, durante la propaganda que precedió al día del milagro, burlándose así de los electores de buena fe que al triunfo contribuyeron.

La inmoralidad alcanzó su pleno durante el gobierno del bienio y es bastante para juzgarla, la frase con amigo señor Martínez Barrio juzgó aquella política: "Sangre, fango, láque el ilustre republicano y desleal grimas". Mas conviene señalar los motivos de esa frase. Aquellos gobernantes dejaron manchas sobre su conducta privada con el contrato de los petróleos, el de los tabacos de Africa, el de importación de trigo, el de obras de enlace en Madrid, con la ejecución de trabajos públicos sin cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, con la tentativa de chantaje al señor March; sobre su conducta política con las deportaciones en masa de extremistas y de monárquicos, con la indiferencia ante crímenes bien conocidos en España y fuera de ella y que no pormenorizamos; con atentados al derecho y a la vida entre los que basta citar Casas Viejas; con su desprecio permanente de las leyes y el ejercicio omnímodo de sus voluntades en propio beneficio; en el terreno social organizando desde el poder la destrucción del régimen de propiedad, violando el por ellos mismos establecido y todo eso coronado por un contubernio republicano-socialista en que mutuamente se olvidaban los principios en aras del monopolio de ilícitos negocios y de la perpetuación en el poder.

Los gobiernos formados después del 19 de Noviembre de 1933 fueron en un principio inmorales en su esencia, pues se formaron, contrariando la voluntad nacional libremente expresada en los comicios y los últimos lo son por su composición, mezcolanza indefinible, contubernio análogo al del bienio, aunque con fines bien distintos y en casos apreciables. Pero el fin no justifica los medios en el terreno moral y la alianza Lerroux-Gil Robles no se diferencia, o muy poco, en el terreno político, de la de Azaña-Prieto.

Grande, muy grande debe ser la vitalidad de un régimen que a pesar de tales gobiernos permanece en pie. Eso consolaría a muchos republicanos si fuera cierto; pero tampoco lo es. Cuando un hombre se arroja desde la Torre Eiffel ni uno solo de los espectadores puede dudar de que llegará al suelo muerto, y es más, podría afirmarse que ya lo está desde el primer tercio de la caída; sin embargo, hasta que llega al final no se constata el hecho. Y eso sucede con la República Española que con rapidez vertiginosa para los que la amamos y con lentitud para los que desean su muerte, va caminando hacia ese fin. Los errores gubernamentales de índole moral tardan mucho en penetrar en la conciencia pública, porque todos somos imperfectos, muchos poco morales y algunos buscadores infatigables de sistemas y soluciones que les permitan acoplar la inmoralidad que les favorece con la apariencia que los absuelve. Mas las penetraciones lentas son las más eficaces. Los pueblos que se levantan por cualquier impulso momentáneo no son peligrosos para sus gobiernos. Aquellos otros que medi-

dera admiración cómo pueden el mismo y la despreocupación triunfa en el seno de corporaciones que hace poco tiempo rodeadas de prestigio. Ese español, sin duda indomado en el terreno moral, no entiende que los cuartitos que permanecen temporalmente en la cueva representan hoy lo que representaría el producto de la venta de una esposa, de una madre o de una hermana; el precio de la traición a un amigo, el desfalco de un cajero, la rapiña de un tutor perverso, la trampa en los libros de contabilidad, sustracción o cambio con dolo de un testamento, la denuncia pagada a un compromiso colectivo, todo que de acciones bajas e infamantes puede concebir la imaginación de un novelista truculento. Afortunadamente hasta hoy creo que son pocos los españoles que comparten tal precio por la propia dignidad y que entre esos pocos podríamos calificar fácilmente al autor de la única frasecita que le proporcionó fama en lo futuro, lo dejaremos a su anonimato que le permitirá seguirse revolcando en el fango donde su espíritu recibe impulsos sostenidos. Taday, desvergonzado.

Algún lector se extraña del título de nuestro periódico y lo atribuirá a que no leyó nuestro artículo de presentación. La honra de España procede de la particular de cada uno de sus ciudadanos y de la conducta observada por la nación en sus relaciones internacionales; y como el momento actual aquí y allá ha sido de ciudadanos y representaciones cuya conducta no sólo es censurable, sino también penable, la honra está entredicho y para combatir a los autores hay que invocar el lema. Ciertamente es que la gran mayoría de los vocales de la Junta Directiva de la Cámara Española no son oficialmente españoles, pues según un documento publicado, veintinueve entre veinticuatro carecían de cédula, pesar de lo que fueron protegidos por la representación oficial del gobierno español; pero en tanto que se llaman españoles, aunque sea sin derecho, todos los actos bajos e inmorales cometidos por ellos sobre la colectividad, caen y la mancha. No vale encogerse de hombros y decir "Fulano es un tal", sino que es preciso desenmascarar a Fulano, probarle su mala conducta y expulsarle de la colectividad para que su presencia no ofenda, su contacto manche, su intervención en asuntos generales no desprestigie las instituciones. Una corporación que permite a los individuos que ostentan su representación, cometer actos de licitud y no protesta virilmente se deshonra; una colectividad que consiente que sus representantes oficiales falten a la verdad ante las autoridades de un país extranjero, permanezcan indiferentes ante la bofetada recibida cuando se les termina terminantemente que mienten, una colectividad que en esos momentos no siente la necesidad inmediata de que esos representantes desaparezcan súbitamente, no está madura para próxima a la ignominia, está ya perdida y hedionda.

Así, para no incurrir en ese género de responsabilidades morales siempre grandes y tremendas, si

(Pasa a la 3a. pág.)

tan la acción, que dan muchas vueltas en su pensamiento al estudio de los hechos, a sus repercusiones, analizan los efectos producidos por aquellos en su conciencia, esos son temibles el día del alzamiento por que su sola indicación basta para el desplome de los regímenes. Y la inmoralidad de los gobiernos republicanos españoles ha entrado ya en la conciencia del pueblo, según dice Martínez Barrio. Hay que renovar o morir y la República Española no puede renovarse porque carece de hombres, de ideas sanas y está gobernada por tráfugas de la monarquía.

ION

DEBERES DE LOS...

(Viene de la 1a. pág.)

separarse del autor de la fal-
ta, y sólo así, procediendo con
honradez, protestando con sin-
ceridad, censurando con ener-
gía, podrá permanecer digna-
mente en la mansión donde en-
contró hospitalidad. El señor
Iglesias ha ofendido a la Na-
ción mexicana, tratando de
sustraer de modo arbitrario a
unos culpables sentenciados
por los Tribunales mexicanos
los efectos de las sentencias,
olvidando que el honor de to-
dos los pueblos está unido in-
separablemente al respeto de
las sentencias dadas por sus
tribunales y la ofensa tiene
que dejar huellas profundas e
inolvidables en el cuerpo na-
cional. La colectividad españo-
la de México si calla otorga;
si sigue en silencio, tolerando
la ofensa, si no protesta a gri-
tos, si no separa su causa de
modo claro y terminante de la
del señor Iglesias y de sus ayu-
dantes, queda en situación
también clara y terminante de
cómplice en la incorrección,
incurso en la falta, incluida en
la reprobación y merecedora
del castigo. Y si se tiene en
cuenta que el señor Iglesias
era su cabeza visible, el que
llevaba su voz, por lo menos
aparentemente, ante el Gobier-
no y la Nación mexicana, ante
el jefe y la casa donde la
hospitalidad se recibe, la falta
resultante de la complicidad
tácita se agiganta y toma pro-
porciones que han de repercu-
tir en la magnitud del castigo.

Colonia Española de Méxi-
co, asociados a la Cámara de
Comercio Española, meditat
sobre vuestra situación ante
la Sociedad Mexicana, repre-
sentada en este caso por sus
Tribunales, resuelta y resol-
vedla pronto, porque cada día
que pasa aumentará el rencor
y cuando llegue el de las san-
ciones sus efectos serán con-
siderables, pues no se ofende
impunemente a un pueblo vi-
ril, de exaltado nacionalismo.
En el número próximo me per-
mitiré invitaros a pensar en
los deberes con vuestra patria
en relación con el caso de que
vengo ocupándome.

Respuesta a los Acerti- jos Pagados

Hemos recibido varias respuestas
a los acertijos insertados en el
número anterior que nos revelan,
interés por el premio (la modestia
excluye tal suposición), sino por los
asuntos. Al primero entre varios
nombres que se indican no hemos
elegido ninguno, porque una de las
soluciones nos demuestra que había-
mos planteado mal el problema, por-
que no había Dimas y Gestas, los dos
eran Gestas... Así el señor R. G.,
Callejón de la Alcaicería número 65,
pueden pasar por su premio.
El segundo acertijo ha dado lu-
gar a una verdadera contienda gra-
mática. Buscaban unos la semejan-
za en las palabras, los otros en la
violencia, los otros en el sentido
evocativo del pasado; pero como
Emiliano no es gramático ni histo-
riador, ni evoca nada, ni conoce el
pasado, se ha concedido el premio
a persona que sin duda es amigo su-
yo, debió conocer bien la frase crú-
da y propone substituir aquella por
"peinetera inmundicia". Ya trata-
mos de conseguir que el premio ofre-

SUETOS DE REDACCION...

(Viene de la 2a. pág.)

país extranjero se vive, todas las
colectividades forman comisiones de-
puradoras, que arrojan implacable-
mente de su seno a los prevaricados,
a los falsarios, a los ladrones, y
no permiten que en nombre suyo
actúen aquellos que al no oír la voz
de su conciencia, necesitan que con
el magnavoz del escándalo momen-
táneo, pero consolador, reparador y
creador de honrada tranquilidad, se
les recuerden sus deberes.

* * *
Volvemos sobre el tema de "Espan-
ña con honra". El año 1931 circuló
por toda España un manifiesto polí-
tico firmado en primer término por
Alcalá Zamora y en último lugar
por Alborno, comprendiendo en lu-
gares intermedios los nombres de
Azaña, Lerroux, Domingo, Prieto,
Maura, Largo Caballero, Martínez
Barrio, etc., es decir, de todos los
que han intervenido en la dirección
de la República Española. En ese ma-
nifiesto se leía: "No hay atentado
que no se haya consentido, abuso
que no se haya perpetrado, inmora-
lidad que no haya trascendido a to-
dos los órdenes de la administración
pública para el provecho político o
el despilfarro escandaloso. La fuerza
ha sustituido al derecho, la arbitra-
riedad a la ley, la licencia a la dis-
ciplina. La violencia se ha erigido
autoridad y la obediencia se ha re-
bajado a la sumisión; la incapacidad
se impone donde la obediencia se
inhibe. La jactancia hace a veces de
valor y de honor, la desvergüenza.
Hemos llegado por el despeñadero
de esa degradación al pantano de la
ignominia presente." Y terminaba
"Viva España con honra." Viva la
República.

Leído lo anterior a nadie extraña-
rá que encontrándose España hoy
en idéntica penosa situación que en
1931, los que queremos gritar, seguir
gritando "Viva la República," no
podamos prescindir de invocar la
España con honra que entonces se
pretendía restaurar. La situación es
hoy peor, pues lo que entonces se
esperaba remedio fuera que la en-
fermedad curara, ha demostrado su
ineficacia, porque no es posible negar
que todos los males señalados en
el párrafo citado se han agravado
y algunos se han hecho incurables
si no se apela al derrame sanguíneo.
Todo el personalismo llevado a la
política por Alcalá Zamora deja ta-
maño al que se censuraba, bien
censurado a D. Alfonso, pues éste,
salvo en el momento de la dictadu-
ra, no discutible en un metro, em-
boscaba su voluntad en interpreta-
ciones dudosas del texto legal o tras
las complacencias de sus ministros,
en tanto que D. Niceto se salta la
Constitución a la torera, con lo que la
fuerza ha sustituido al derecho, etc.
Cuando Méndez Núñez decía: "Más
quiera España honra sin barcos que
barcos sin honra" y los revolucionar-
ios del 69 gritaban "Viva España
con honra" y los de 1931 repetían
el mismo grito, es que la honra na-
cional es el primer objeto de la
atención de los españoles y España
no puede ser honrada ni considerada
como tal en tanto los españoles con-
sientan corporaciones quebradas con
fraude y representantes acusados pú-
blicamente de faltas a la verdad en
el ejercicio de su cargo.

cido llegue a poder del licenciado X,
actualmente internado en la Peni-
tenciaria por un ligero descuido de
técnica profesional.

El tercero ha sido declarado de-
sierto. Un eminente confectionador
y aprobechador de bibliotecas nos
dice que a pesar de inauditos esfuer-
zos no ha logrado encontrar dato
alguno que revele la existencia del
D. Bernardo Díaz, pretendido histo-
riador del descubrimiento, según
Emiliano. Es de sentir.

Al cuarto recibimos como solución
un número compuesto de la unidad
seguida de muchísimos ceros. Mas
como no trae las consideraciones en
que se cimentó el cálculo, no la to-
mamos en consideración, pues el pro-
blema no se refería tan sólo al nú-
mero de votos e interjecciones, pues
pedía también efectos, tono, etc.

MUSSOLINI Y EL...

(Viene de la 1a. pág.)

La cuestión es conocida. La
entrevista concedida por el Duce
a un periodista extranjero ex-
presa, unida a otras manifes-
taciones del primero, su inten-
ción clara y terminante de con-
quistar a Etiopía, fundándose
en antecedentes coloniales de
otros países, en derechos hipoté-
ticos, concedidos por trata-
dos, y en el aumento constante
de la población italiana, que
le obliga (según él), a buscar
dónde colocar el exceso, aña-
diendo que llevará a cabo sus
propósitos con, sin o contra la
Liga de Naciones. Empezare-
mos por el final. Italia entró
voluntariamente en la Liga de
Naciones, firmó su Estatuto, se
comprometió a cumplirlo, to-
mó parte en sus conferencias,
sancionó sus acuerdos y un día,
impulsado por un imperialis-
mo que la Liga tenía por mi-
sión esencial contener y borrar
de la mente de los gobernantes,
pretende no sólo apelar a la
guerra, sino que lo hace contra
un co-asociado que puso su
debilidad al amparo de ese Es-
tatuto, cuya finalidad única,
entiéndase bien, única, era ga-
rantizar la independencia y el
derecho de los pueblos librán-
dolos de la ruina y del castigo
que las guerras llevan con-
sigo. Mussolini no comprende
las obligaciones que la firma de
una Nación le impone, consi-
dera todo lo hecho en Ginebra
como papeles mojados y en un
rasgo de satánico orgullo, pa-
rece decir que todos esos tra-
bajos son buenos para hom-
bres y naciones de categoría
inferior, pero no para los nie-
tos de César, que había ense-
ñado ya cómo la espada rompe
las redes protectoras crea-
das por el Derecho. Pertene-
cer voluntariamente a una So-
ciedad Internacional, creada
para proteger el Derecho con-
tra la fuerza, amenazarla si no
aprueba un acto de fuerza que
se va a cometer contra un co-
sociado, y no querer discutir
ninguna posibilidad de ar-
reglo, procedimientos condena-
bles son, y la universalidad de
las conciencias se lo hará sen-
tir.

Todos, o casi todos los países
han sostenido guerras de con-
quista; todos, o casi todos han
aumentado sus territorios con
la rapiña disfrazándola con
pretextos diversos; pero ese
precedente no puede ser invo-
cado, mientras no desaparez-
can de la avida los treinta mil-
lones de hombres que entre
muertos, lisiados y enfermos,
digan que dieron su sangre pa-
ra que el Derecho triunfara so-
bre la fuerza, para que desa-
parecieran los imperialismos,
para que la Justicia empezara
a poder ser contemplada por
todas las naciones con el res-
peto que merece, y una espe-
ranza de fraternidad univer-
sal pudiera ser concebida. En
tanto que esos hombres vivan
y apoyándose en su recuerdo
cuando mueran, podrá siem-
pre decirse a Mussolini que la
Gran Guerra, hecatombe sin
precedente, o fue originada por
un capricho de los gobernantes
dignos entonces de mil
muertes o respondió a la ne-
cesidad generalmente sentida

EL CASO IGLESIAS ANTE EL...

(Viene de la 1a. pág.)

te de Justicia, conceda que los bie-
nes intervenidos aparezcan como
propiedad del gobierno español y la
Junta Central de Conciliación y Ar-
bitraje levante la intervención; ape-
la el señor Menacho y el señor Juez
Primero Administrativo, Lic. Rojo
Gómez, falla en su favor alegando
una serie luminosa de consideracio-
nes, entre las que la pertinente en
este momento es la del grave per-
juicio que se seguiría para los obre-
ros mexicanos trabajando con empre-
sas o patrones extranjeros si se ad-
mitiera la intromisión tardía e in-
justificada de representantes extran-
jeros para impedir el cumplimiento
de fallos pronunciados con arreglo
a las leyes del país. Conformes la

por todos los pueblos de llegar
a un mejor entendimiento, de
vivir en paz, de dedicarse tran-
quilamente al trabajo, así co-
mo la Liga tuvo por finalidad
satisfacer esas necesidades y
decirle también que Italia
combatió en las filas de los de-
fensores del Derecho y formó
voluntariamente entre los aso-
ciados. Los sacrificios impues-
tos a las naciones por la Gran
Guerra se justificaron anun-
ciando el triunfo del Derecho
y la creación de un Organismo
Internacional destinado a pro-
tegerlo y desarrollarlo, y por
eso en la Historia Universal
empezaba una nueva era; la
del Derecho, que, dejando
atrás como recuerdo triste de
tormentas pasadas, todo eso en
que Mussolini pretende apo-
yarse, corriendo sobre tantas
tragedias un piadoso telón de
olvido, en aras de la futura
convivencia, anunciaba días
futuros de dicha y renovación.
Si la historia pudiera desarro-
llarse, como Mussolini preten-
de, invocando antecedentes,
habría que renunciar a toda
esperanza de renovación, no se
encontraría nunca el momento
inicial para emprender los
nuevos derroteros exigidos por
la moral internacional y por
las necesidades de la conviven-
cia.

¿Qué decir de los Tratados?
Antes de la Gran Guerra, mer-
ced a la Diplomacia secreta y
al abuso de la fuerza, las gran-
des potencias, es decir, las
grandes despojadoras, se re-
parten la tierra y sus habitan-
tes con desprecio absoluto de
todas las leyes divinas y hu-
manas, buscando mercados y
esclavos; pero, como eso no po-
día continuar indefinidamente,
pues era vivir en estado de
barbarie, la Liga de Naciones
apoyada en las conciencias
honradas, transformó para el
futuro tales procedimientos,
suprimiendo la diplomacia se-
creta y obligando a todos los
componentes a someterle los
tratados que firmaran en lo
sucesivo. Claro es que, virtual-
mente, se anulaban todos los
compromisos contraídos con
anterioridad; pero aunque así
no fuera, si esos tratados per-
mitían aplicar la fuerza y la
conquista y el espíritu nuevo
condenaba ese agente y ese
procedimiento, al acomodarse
a la nueva vida todo aquello
borrado quedaba. Las esferas
de influencia, las penetracio-
nes económicas, etc., quedaban
relegadas al museo de la bar-
barie, catalogadas como má-
scaras o disfraces de pensa-

Junta Central, apeló la Cámara de
Comercio y perdió el punto ante la
Suprema Corte de Justicia. En ese
momento el señor Iglesias, Embaja-
dor de España, cierra la Cámara sin
facultades para ello, inicia una se-
rie de gestiones cuyo carácter y ba-
ses desconocemos, para anular el fa-
llo de la Suprema Corte, y como la
Secretaría de Relaciones tenía un
nuevo titular competente, honora-
ble, provisto del sentido de justicia
y sobre todo, convencido de que nin-
gún gobierno puede contribuir a
desautorizar los Tribunales de su
país, anulando sus fallos, por com-
placencias injustificadas hacia otros
países, y que por el contrario, ha de
sostenerlos virilmente, pues en esa
empresa tiene la seguridad de llevar
consigo la opinión general, las pre-
tensiones infundadas del señor Igle-
sias fracasaron. Entonces, dicho se-
ñor, disolvió sin derecho y sin ajus-
tarse a procedimientos legales la
Institución.

El asunto tiene varias fases: la
relativa a los asociados que la re-
solverán según su propio espíritu,
honor, sentimiento de responsabi-
lidad y consideración a la sociedad en
que viven les aconsejen; la relativa
a la defensa de las sentencias de los
Tribunales Mexicanos que está en
buenas manos, dada la respetabi-
lidad de las personas que ocupan los
puestos públicos y que tantas prue-
bas llevan dadas de cómo entienden
el cumplimiento de los deberes inhe-

(Pasa a la 4a. pág.)

mientos inconfesables, aun en
las épocas de fuerza.

Italia tiene gran densidad
de población. Eso representa
fuerza militar, fuerza econó-
mica al aumentar el número
de productores, conducta ho-
norable en los matrimonios
que no conocen o no practican
las supresiones inmorales, to-
dos motivos para felicitarse.
Pero ¿es que todo eso dá dere-
cho para pasar la vista por el
mapa, fijarla en un punto, de-
cirse que allí hay un país poco
poblado, fértil, atrasado en la
explotación de sus riquezas y
decidir conquistarlo para ver-
ter allí el exceso de población?
Llamamos la atención de to-
dos los pueblos débiles. Méxi-
co tiene siete habitantes por
kilómetro cuadrado, es uno de
los puntos del mapa en que
puede fijarse la mirada ávida
de un conquistador desprovisto
de la noción del derecho. Toda
la América Española está
en idénticas condiciones.
¿Puede admitirse sin protesta
vigorosa y enérgica que en la
era del Derecho, amamantada
en Ginebra, se pueda procla-
mar cínicamente el llamado
derecho de conquista, que no
es otra cosa que un latrocinio
ejecutado por naciones ente-
ras en vez de gavillas? No; la
conciencia de las gentes hon-
radas sabrá impedirlo. Y aun-
que Mussolini pretenda hacer
de su cuestión particular una
cuestión de razas, sólo consi-
gue, obrando así, aumentar la
inmoralidad de su argumen-
tación, pues las políticas racia-
les están siendo condenadas
por todos los teóricos del bien
común, y éste es el que ha de
preponderar, si el hombre
quiere despojarse por comple-
to de su animal origen. Conti-
nuaremos en otra ocasión, o
continuarán otros, pues cree-
mos que debatir públicamente
la cuestión etiope-italiana es
una necesidad vital para todos
los amantes del Derecho.

DOCUMENTACIÓN

Queja al Tribunal de Garantías contra el Sr. Ministro de Estado

Excmo. señor:

La Constitución vigente en la República Española, en el Título IX, artículo 121, ocupándose del Tribunal de Garantías Constitucionales, le concede competencia para conocer en el inciso (b) del recurso de amparo de garantías individuales, cuando hubiera sido ineficaz la reclamación ante otras autoridades, y en el (c) de la responsabilidad criminal del Jefe del Estado del Presidente del Consejo y de los Ministros. El que suscribe hace a V. E. una exposición de su caso por creer está comprendido dentro de los incisos señalados.

Habiendo seguido un litigio con la Junta Directiva de la Cámara Oficial Española de Comercio en los Estados Unidos Mexicanos ante los Tribunales de Trabajo de la República Mexicana, a cuya jurisdicción se sometió voluntariamente la Institución que al ser de Derecho Privado según consta del Estatuto y Reglamento que acompaño en esta Instancia y por estar registrada como tal en la República Mexicana, no podía proceder de otro modo, logré, después de dos años de tramitación, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana me concediera amparo, reconociendo mis derechos y en virtud de tal decisión, que la Sección 6a. de la Junta Central de Conciliación y Arbitraje pronunciara un laudo en mi favor y en una de las cláusulas el pago de determinadas cantidades, y habiendo manifestado la sentencia que no tenía fondos (cosa no cierta, pero que constituye otra figura de delito que aquí no trato), hubo necesidad de embargar sus bienes, nombrándose el Depositario e Interventor correspondientes.

En ese estado las cosas, el Ilustrísimo señor D. Ramón M. Pujadas, interviniendo por favoritismos, antipatías personales, o cualquier otro motivo por mí no conocido, trató de proteger a la sentenciada y logró que la Secretaría de Relaciones Exteriores de esta República declarara que, habiendo dicho el Representante de España que los bienes de la sentenciada eran propiedad del Gobierno Español, procedía levantar el embargo y así lo hizo el señor Presidente de la Junta Central de Conciliación y Arbitraje. No conforme yo con tal proceder, entablé una queja ante los Tribunales mexicanos, presenté el alegato que también acompaño (Docto. Núm. 2), así como la sentencia (Docto. Núm. 3), recaída sobre la citada queja. La lectura de esa sentencia de la que apelé sin éxito la Junta Directiva de la Cámara Oficial Española de Comercio sugiere tristes reflexiones sobre el papel asumido por el señor Pujadas, pues en ella se prueba que los Tribunales mexicanos no admiten que el simple dicho sin pruebas de un representante extranjero, baste para hacer nugatorias las sentencias de los Tribunales mexicanos y se prueba también lo que era fácil, por ser descarada la mentira alegada, que los bienes de la Cámara de Comercio Española no son propiedad del Gobierno español, ya que la simple lectura del Estatuto y del Reglamento así lo demuestra.

Convencido yo de que el señor Pujadas había faltado a su deber, elevé en 27 de marzo de 1935 una instancia al Excmo. Sr. Ministro de Estado D. Juan José Rocha (Doc. Núm. 4), y no habiendo obtenido contestación la reiteré en junio 9 de 1935 (Doc. Núm. 5), con el mismo negativo resultado. He creído llegado el momento de recurrir al sumo Tribunal que V. E. preside, sometiendo mi criterio personal respecto de la petición que formulo de que se sancione la conducta del Excmo. Sr. Ministro de Estado, fundándola en las consideraciones siguientes:

1a.—El Ilustrísimo señor D. Ramón M. Pujadas faltó a la verdad al saber de que lo hacía, ya que conocía o podía conocer en cualquier momento y tenía la obligación de conocer antes de intervenir, el Es-

tatuto y Reglamento de la Cámara Oficial Española de Comercio en los Estados Unidos Mexicanos de cuya lectura en los párrafos señalados en el ejemplar que acompaño a esta instancia, se deduce claramente que la Cámara Española de Comercio es una Institución de Derecho Privado.

2a.—Dicho señor comprometió con tal mentira la dignidad de su cargo, engañando a la Secretaría de Relaciones Exteriores de la República Mexicana para poder utilizar un subterfugio de Derecho Internacional en ningún caso aplicable a la cuestión, pues la Cámara considerándose Institución de Derecho Privado había aceptado la Jurisdicción de los Tribunales mexicanos, había presentado recursos, formulado alegatos, acatado sentencias, y éstas dadas por el Tribunal Máximo de esta República habían pasado ya a la autoridad de cosa juzgada y estaban en vías de ejecución.

3a.—El señor Pujadas, obrando como lo hizo, sembraba un conflicto entre la nación española y la mexicana, oponiéndose sin razón valedera a que fueran cumplidas las sentencias de los Tribunales de la segunda, es decir, tratando de hacer nugatorios los efectos de las leyes de Procedimiento, de Amparo, Federal del Trabajo y estimulando a la Cámara de Comercio a colocarse en actitud de franca rebeldía contra la Suprema Corte de Justicia mexicana;

4a.—El señor Pujadas daba ante la sociedad mexicana el triste espectáculo de aconsejar a la Cámara Española de Comercio una actitud de desprestigio, pues no se comprende que una Institución, donde por su naturaleza debe albergarse la honradez en los procedimientos comerciales y que debe servir de ejemplo de moralidad, se declare en quiebra fraudulenta y obtenga el apoyo de las autoridades oficiales de su país, que debían haber sido las primeras en obligarle a cumplir sus compromisos, para conservar la dignidad colectiva y no amenguar el prestigio español en el extranjero;

5a.—Que la sentencia cuya copia certificada constituye el documento número 3, establece en forma precisa y terminante la ligereza y temeridad del señor Pujadas en este asunto, le da un mentís oprobioso para la representación de España en México, aunque merecido, y el señor Pujadas, conocedor de tal mentís permanece en su puesto, siendo señalado por todo el mundo, que lo ocurrido conoce, como embustero en las relaciones oficiales y poco cuidadoso del prestigio inherente a su alto cargo.

6a.—Que el Ilustrísimo señor Pujadas, autorizando que los fondos recaudados en la Cámara y los existentes al declararse insolvente, se depositaran en el Consulado General, para sustraerlos a la acción del Depositario-Interventor, se hizo cómplice de un delito penado por los Tribunales mexicanos, como lo es de ocultación de fondos de una corporación, declarada insolvente, con fraude para no cumplir sentencias firmes de aquellos, fraude que aparece respaldado y cubierto por las autoridades oficiales españolas.

7a.—Que el Ilustrísimo señor Pujadas, impidiendo que se celebrara en febrero de este año la Asamblea General de asociados de la Cámara Española de Comercio, prescrita por Estatuto y Reglamento, y no celebrada todavía en la fecha de este escrito, se excedió de sus atribuciones de Presidente HONORARIO, de la Junta Directiva y lo hizo con el único objeto de que no aparecieran los balances demostrativos de la falsedad de la declaración de insolvencia, asumiendo así la protección de los responsables de otro delito, cual es el de ocultación de documentos y falsificación de los mismos.

8a.—El Excmo. señor Ministro de Estado, conocedor de estos hechos en su parte sustancial por mis escritos citados, no sólo no procedió a sancionar la conducta de su subordinado, ni

a formarle expediente, como pedía el que suscribe en sus instancias de 27 de marzo y 9 de junio de 1935, sino que burlándose del artículo 35 constitucional, ni siquiera contestó mis escritos ni acusó recibo, con lo que pudo el señor Pujadas seguir vulnerando mis derechos, que por su cargo tenía obligación de proteger, y también perjudicar mis intereses concedidos por sentencias firmes de Tribunales mexicanos, incluso el máximo (equivalente a nuestro Tribunal Supremo), pasadas ya en autoridad de cosa juzgada y en vías de ejecución.

Posteriormente el Excmo. Sr. D. Emiliano Iglesias, Embajador actualmente en la República Mexicana, no solamente siguió la conducta errónea del señor Pujadas, sino que perdiendo toda ecuanimidad cerró arbitrariamente la Cámara Española de Comercio (y digo arbitrariamente, pues es tan sólo Presidente HONORARIO de la misma según el Estatuto y Reglamento vigentes), y más tarde ha trasladado las oficinas de la misma al edificio ocupado por la Embajada de España, creyendo así cubrirlas con la inmunidad diplomática. Tal conducta equivale a decir a los Tribunales mexicanos que no se reconocen las sentencias pronunciadas por ellos en litigios ocurridos entre españoles e instituciones españolas de Derecho privado, sometidas voluntariamente a su jurisdicción. Tal conducta coloca también al Embajador de España en la triste postura de convertirse en protector de Instituciones comerciales que sin cuidado ninguno de su propia reputación ocultan sus fondos como cualquier carbonería quebrada ilícitamente, para eludir el cumplimiento de los fallos contra ellas pronunciados por Tribunales respetables; pero como todo esto va a ser juzgado en breve plazo por la sociedad mexicana, por los estudiantes, por los obreros, y hasta por los mismos Tribunales mexicanos, sólo se hace mención en este escrito por vía de referencia, pues el principal objeto de él es poner de relieve la conducta del señor Pujadas y la de su inmediato jefe, el Excmo. Sr. Ministro de Estado.

Por todo lo expuesto Excmo. señor y en virtud de los incisos (b) y (c) del artículo 121 constitucional, pido respetuosamente a V. E. se sirva ordenar que el Tribunal de Garantías que tan dignamente preside, reciba, atienda, tramite y sancione la queja que formalmente presento contra el Excmo. señor Ministro de Estado, por los motivos siguientes:

1o.—Por no haber atendido mis quejas de 27 de marzo y 9 de junio de 1935 contra el Ilustrísimo señor Pujadas, por haber dicho señor violado en mi persona las garantías constitucionales, interviniendo sin necesidad en un juicio ventilado y sentenciado ante los Tribunales mexicanos, con el único objeto de perjudicarme en mis derechos e intereses.

2o.—Por no haber formado expediente a un funcionario subordinado suyo, como yo lo pedía, por haber faltado a la verdad en sus relaciones con el gobierno mexicano, ante el que ostentaba la representación de España que quedaba manchada con la mentira.

3o.—Por omisiones en el ejercicio y desempeño de las obligaciones de su elevado cargo que no le permitían desinteresarse del prestigio de España en el extranjero y en ese prestigio juega papel importantísimo el que los Representantes de España u otros países no sean desmentidos con razón por las autoridades judiciales y permanezcan en sus puestos sin cuidado de la propia dignidad a pesar de ser notorio lo ocurrido.

Y confiando en que ese digno Tribunal de Garantías hará honor a su nombre y no se detendrá para sancionar ante la elevada posición de la persona acusada, pues delitos y faltas son mayores cuanto lo es la categoría de los autores, espero que

tantos atentados cometidos por representaciones oficiales de España en el extranjero no quedarán impunes, para bien de la Justicia, decoro de España y prestigio de su Representación en el exterior.—México, 17 de noviembre de 1935.

México, D. F., 9 de junio de 1935.

Sr. Diputado Presidente de la Comisión de Estado en las Cortes. Madrid, España.

Distinguido señor:

En relación con el litigio que estoy sosteniendo por cuestiones de trabajo desde hace algún tiempo con la Junta Directiva de la Cámara Española de Comercio de México, he elevado a la Superioridad, fundándose en el artículo 35 de la Constitución vigente, varias instancias a las cuales se ha dado constantemente la llamada por respuesta. Es lamentable que en dicho artículo 35 no se consigne, como en otras constituciones, la obligación de contestar las peticiones a que se refiere. A este respecto la Constitución Mexicana, en el segundo párrafo del artículo octavo dice: "a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Ciertamente nuestros legisladores han de haber supuesto que no era necesaria tal recomendación por ser sabido que a toda petición corresponde una respuesta y eso ya no como cuestión de política, sino como asunto de simple educación, concedida desde luego a todo funcionario que ocupa elevados cargos en la administración nacional.

Incluyo una copia de la penúltima elevada al Ministerio de Estado con fecha 23 de marzo del año en curso y otra copia de la última dirigida al mismo Ministro con fecha 9 del corriente junio. Agotada mi paciencia, en vista del poco aprecio que se hace en los Ministerios españoles de las quejas expuestas por los ciudadanos que en el extranjero residimos, pues nuestros gobiernos olvidan que la defensa del derecho de uno envuelve siempre la defensa del derecho de todos y que ese uno en los gobiernos democráticos es siempre el fundamento del poder público, voy a esperar un plazo prudencial para enterarme de que se ha iniciado el expediente al señor D. Ramón M. Pujadas, culpable de los delitos morales señalados en mis escritos, y si el Gobierno español no coincidiera conmigo en la necesidad de sancionar la torpe conducta del señor Pujadas, o se encerrara en el desdenoso silencio anti-republicano, anti-democrático, anti-constitucional y carente de educación, como hasta la fecha, merced a quien sabe que influencias ocultas, lo ha venido haciendo, emplearé los dos medios que a continuación señalo:

1o.—Elevaré una solicitud al señor Secretario de Relaciones de este país, probándole con sentencias firmes de sus propios Tribunales nacionales que el señor Pujadas ha faltado a la verdad a conciencia, que lo ha engañado al manifestarle un criterio falso; que con esa acción punible ha tratado de evitar la ejecución de sentencias firmes, y pasadas ya a la autoridad de cosa juzgada, de los Tribunales mexicanos, pidiéndole que en vista de estar probado plenamente mi aserto, se pida al Gobierno español la destitución del señor Pujadas.

2o.—Acompañar esta solicitud de una circular a todo el Cuerpo Diplomático extranjero, haciéndole ver la clase de compañero con quien el Gobierno español les obliga a tratar los asuntos públicos y como consecuencia imponerle su trato en las cuestiones sociales, imposición inadmisible porque cuando un hombre colocado en un puesto representativo tan elevado como lo está el señor Pujadas se degrada a sí mismo, mintiendo sin necesidad alguna para intervenir en cuestiones que le deben ser perfectamente ajenas, para sa-

EL CASO IGLESIAS....

(Viene de la 2a. pág.)

rentes a sus cargos, y por último, relativa a la sanción que el elemento obrero mexicano debe dar a la tentativa hecha contra los derechos del trabajador y que tiene dos aspectos, según que los asociados de la Cámara de Comercio Española invaliden el acto impulsivo del señor Iglesias o callándose, se hagan cómplices tácitamente, compartiendo la responsabilidad.

En el primer caso el elemento obrero puede y debe protestar contra la conducta del señor Iglesias, pedir al gobierno mexicano que queden burladas las leyes de la nación. En el segundo los obreros mexicanos pueden y deben a más de lo anterior, pedir que en lo sucesivo no puedan formarse agrupaciones españolas de carácter comercial en vista de la conducta observada por la hoy ilegalmente disuelta y solicitar de las nacionales existentes contribuyan a que los observadores de tal conducta no tengan con ellas relaciones de ninguna clase. En el próximo número someteremos a consideración del elemento obrero mexicano las solicitudes correspondientes a ambos casos dirigidas a los ciudadanos Presidente de la República y Secretarios de Relaciones Exteriores y de Gobernación.

No está de más que digamos aquí que aparte de nuestro caso hay dos más referentes a este asunto, pues la señorita Moctezuma y el señor Martínez, empleados de la Cámara Española de Comercio, que llevaban ocho años al servicio de la negociación, ven sus intereses perjudicados por el acto arbitrario y despectivo del señor Iglesias.

tisfacer antipatías u odios injustificados o protecciones indebidas, debe ser compañero poco agradable y no dudo que todos esos señores juzgarán, como debe ser juzgada la conducta de un gobierno como el nuestro, que al conocer actos como los señalados, no sancione inmediatamente en cumplimiento de elevados deberes que a la dignidad nacional atañen.

Comprenderá usted, señor Diputado Presidente, la necesidad en que me encuentro de apelar a procedimientos de violencia ya que en el Ministerio de Estado, desde los tiempos de la monarquía existe entre todos sus empleados un esfuerzo de defensa mutua sea cualquiera la falta cometida por cada uno de los componentes, que si hubiera sido empleada con algún talento del que hay mucha falta y con igual intensidad, habría conservado España su verdadero lugar en el mundo. Es probable que el señor Ministro de Estado ni siquiera tenga noticias de la conducta del señor Pujadas, que mis solicitudes no hayan llegado a sus manos y de ahí la necesidad de que yo me dirija a usted para que conozca, tanto el asunto en sí como las derivaciones posibles a que puede dar lugar.

Aprovecho la ocasión de reiterarme su uafmo. atto. y S. S.

En una sociedad reglada, un juicio dado según las reglas, por los jueces naturales y competentes de la causa, de los que nadie en el mundo tiene el derecho de poner en duda la imparcialidad, la lealtad, la integridad, no podría ser revisado revolucionariamente.

El respeto de la cosa juzgada lleva consigo la existencia misma de las sociedades y por eso las leyes restringen rigurosamente el derecho de revisión.

Resistir a la injusticia es un DEBER del individuo para consigo mismo, porque es un precepto de la EXISTENCIA MORAL; es un DEBER para con la sociedad porque esta resistencia no puede ser coronada con el triunfo, más que cuando es general.